



I

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, del tratamiento y transferencia internacional de datos que se describe en la misma a fin de dar cumplimiento al requerimiento de información exigido por la legislación de procedimiento judicial estadounidense en fase de pre-trial discovery, referido a “la información disponible para (la consultante) y sus empleados que sea relevante al objeto del procedimiento”.

A tal efecto, se plantea en primer lugar “si la entrega de la información que contenga datos de carácter personal tal y como está disponible no supone un incumplimiento de la normativa de protección de datos por venir exigida esa entrega por las obligaciones establecidas en la legislación procesal estadounidense”, añadiendo la consulta que, en caso de que tal legitimación no pudiera aplicarse sin más a la totalidad de la información se realizarían determinadas operaciones de filtrado de la información que se detallan en aquélla y que pueden resumirse del siguiente modo:

- En primer lugar, se determinaría aquellos empleados de la consultante “que potencialmente tienen mayor relación con las cuestiones tratadas en el procedimiento judicial”.
- Dichos empleados sería informados por escrito “sobre el procedimiento de recopilación, procesamiento y entrega a efectuar a los demandantes en el seno del procedimiento judicial en los EE.UU”.
- A continuación se realizaría “una copia de seguridad íntegra de los archivos existentes en los dispositivos electrónicos usados por los empleados en su trabajo”, entregándose dos copias de la misma a los empleados para su custodia directa. La consulta indica que “inicialmente no se pretende acceder a esta información, pero es necesario efectuar la copia por si se cuestionase en el litigio en EE.UU. la adecuada recopilación de la información (esto es, la integridad de la información que debe



ser entregada, sin alteraciones ni manipulaciones que la falseen)".

- De dicha copia, los empleados podrán generar un fichero seguro en que separen y guarden su información privada, realizándose a continuación una copia de los archivos restantes existentes en los dispositivos electrónicos, una vez excluida tal información.
- Se procedería entonces a la realización de dos operaciones de filtrado de la información:
  - o Una primera, realizada por la propia entidad, aplicando a la copia "unos criterios de selección por palabras clave acordadas con los demandantes para el filtrado de la información", creando un fichero con la documentación resultante.
  - o Una segunda, que sería llevada a cabo por una tercera entidad con la que se habría celebrado un contrato de encargo del tratamiento conforme a lo exigido por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, en que se procedería a la supresión de los "datos personales que excedan de nombre, cargo y datos de contacto y que no estén siendo utilizados en el contexto profesional a que se refiere el art. 2.2 del Real Decreto 1720/2007", así como de la información protegida por el secreto bancario o por el secreto profesional.
- La documentación resultante sería entregada a los demandantes, con el alcance que se desprende de los puntos anteriores.

## II

Descritos así los términos de la consulta, es preciso señalar que el tratamiento y la consiguiente transferencia internacional de datos que pudiera producirse como consecuencia de la existencia de un litigio en los Estados Unidos de América que se encontrase en fase de pre-trial discovery ha sido analizado por el Grupo de Trabajo de Autoridades de Protección de Datos, creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE en su documento de trabajo 1/2009, de 11 de febrero.

El citado documento, tras poner de manifiesto las especialidades de esta fase procesal, establece una serie de pautas a tomar en consideración en la remisión de información para el cumplimiento de las obligaciones generadas en la citada fase, estableciendo como premisa esencial la de que el mero hecho de que la legislación procesal de los Estados Unidos pudiera imponer las obligaciones descritas en la consulta, “una obligación impuesta por una norma legal o reglamentaria extranjera no puede calificarse como obligación legal que legitime el tratamiento en la Unión Europea”.

Ello supondría, desde la perspectiva de la aplicación del derecho español al supuesto analizado, que el tratamiento y la consiguiente cesión de datos que pudiera tener lugar como consecuencia de la solicitud efectuada por los órganos judiciales estadounidenses no podría sin más ampararse en la habilitación legal establecidas por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en el sentido previsto en el artículo 10.2 a) del Reglamento que la desarrolla cuando considera legitimado el tratamiento autorizado por una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario si el tratamiento o la cesión de los datos son “necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”. Es decir, la legislación procesal estadounidense no puede ser incluida dentro del concepto de Ley o norma de derecho de la Unión que legitima el tratamiento conforme a lo previsto en los preceptos a los que se ha hecho referencia.

Consecuencia de lo anterior será necesariamente que haya de responderse de forma negativa a la primera de las cuestiones planteadas en la consulta, por cuanto no constituiría causa legitimadora suficiente del tratamiento el hecho de que la legislación procesal de los Estados Unidos obligue a la consultante a revelar la información tal y como está disponible.

### III

Sentado lo anterior, debe ahora analizarse si el procedimiento descrito en la consulta podría permitir, no obstante, que el tratamiento y comunicación de los datos pudiera encontrarse amparado por lo dispuesto en la legislación de protección de datos. A tal efecto, nuevamente, deberá tomarse en consideración lo señalado por el Grupo de Trabajo del artículo 29 en su documento de trabajo 1/2009.

El citado documento, copia del cual en lengua inglesa (única en la que se encuentra disponible) se adjunta a la consulta, pone de manifiesto que el



cumplimiento del requerimiento de información efectuado por la autoridad judicial estadounidense implicará la realización por la entidad requerida de dos tipos de actividades que suponen un tratamiento de datos de carácter personal: por una parte, la citada entidad deberá proceder en un primer momento a la recopilación y al filtrado de la información necesaria para atender el requerimiento y por otra procederá a la remisión de la información para que pueda ser accedida por la contraparte, debiendo encontrarse ambas actividades de tratamiento legitimadas por la normativa de la Unión reguladora del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Respecto del hecho de que dichas operaciones conlleven un tratamiento de datos de carácter personal, la consulta plantea en hecho de que por la misma se llevará a cabo un filtrado de la información de forma que se excluya de la misma cualquier dato distinto del nombre, cargo y datos de contacto de los afectados, quedando así únicamente accesibles los datos que la propia consulta enumera en tres apartados sucesivos:

- *“De los empleados o representantes personas físicas de (la consultante) que figuran en la documentación de (la consultante) y comunicaciones (incluyendo correos electrónicos) entre (la consultante) como persona jurídica y cualquier tercero.*
- *De los empleados o representantes personas físicas de (la consultante) que figuran en la documentación de (la consultante) y comunicaciones entre ellos (incluyendo correos electrónicos, cuando la restante información contenida en tal documentación y comunicaciones se refiere únicamente a información de carácter profesional relativa (a la consultante) como persona jurídica (a su negocio, operaciones, etc).*
- *De los empleados o representantes personas físicas de una persona jurídica distinta de (la consultante) que figuran en la documentación y comunicaciones (incluyendo correos electrónicos) intercambiadas entre esa persona jurídica y (la consultante) como persona jurídica.”*

Se plantea, teniendo en cuenta esta circunstancia, si sería posible considerar que los tratamientos efectuados quedarían excluidos de la aplicación de la legislación de protección de datos, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los



datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

La respuesta a la citada cuestión podría ser positiva en lo referente a la remisión de la información a la contraparte, pudiendo tener en cuenta lo reiteradamente señalado por esta Agencia en relación con la interpretación del artículo 2.2 del reglamento. Así, en particular, en el informe de 18 de febrero de 2008 se indicaba lo siguiente:

*“(...) la Agencia ha venido señalando que en los supuestos en que el tratamiento del dato de la persona de contacto es meramente accidental en relación con la finalidad del tratamiento, referida realmente a las personas jurídicas en las que el sujeto presta sus servicios, no resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, viniendo el Reglamento a plasmar este principio.*

*No obstante, nuevamente, es necesario que el tratamiento del dato de la persona de contacto sea accesorio en relación con la finalidad perseguida. Ello se materializará mediante el cumplimiento de dos requisitos:*

*El primero, que aparece expresamente recogido en el Reglamento será el de que los datos tratados se limiten efectivamente a los meramente necesarios para identificar al sujeto en la persona jurídica a la que presta sus servicios. Por este motivo, el Reglamento impone que el tratamiento se limite a los datos de nombre y apellidos, funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.*

*De este modo, cualquier tratamiento que contenga datos adicionales a los citados se encontrará plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, por exceder de lo meramente imprescindible para identificar al sujeto en cuanto contacto de quien realiza el tratamiento con otra empresa o persona jurídica.*

*Por ello, no se encontrarían excluidos de la Ley los ficheros en los que, por ejemplo, se incluyera el dato del documento nacional de identidad del sujeto, al no ser el mismo necesario para el mantenimiento del contacto empresarial. Igualmente, y por razones obvias, nunca podrá considerarse que se encuentran excluidos de la Ley Orgánica los*



*ficheros del empresario respecto de su propio personal, en que la finalidad no será el mero contacto, sino el ejercicio de las potestades de organización y dirección que a aquél atribuyen las leyes.*

*El segundo de los límites se encuentra, como en el supuesto contemplado en el artículo 2.3, en la finalidad que justifica el tratamiento. Como se ha venido indicando reiteradamente, la inclusión de los datos de la persona de contacto debe ser meramente accidental o incidental respecto de la verdadera finalidad perseguida por el tratamiento, que ha de residenciarse no en el sujeto, sino en la entidad en la que el mismo desarrolla su actividad o a la que aquél representa en sus relaciones con quienes tratan los datos.*

*De este modo, la finalidad del tratamiento debe perseguir una relación directa entre quienes traten el dato y la entidad y no entre aquéllos y quien ostente una determinada posición en la empresa. De este modo, el uso del dato debería dirigirse a la persona jurídica, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad.*

*Así sucedería en caso de que el tratamiento responda a relaciones “business to business”, de modo que las comunicaciones dirigidas a la empresa, simplemente, incorporen el nombre de la persona como medio de representar gráficamente el destinatario de la misma. Por el contrario, sin la relación fuera “business to consumer”, siendo relevante el sujeto cuyo dato ha sido tratado no sólo en cuanto a la posición ocupada sino como destinatario real de la comunicación, el tratamiento se encontraría plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento.”*

Sin embargo, esta conclusión no podría en ningún caso aplicarse al tratamiento previo de los datos que sería realizado por la consultante, de forma directa en primera instancia y posteriormente mediante un encargado del tratamiento que tendría la consideración de tercero de confianza a los efectos de la depuración de la información, dado que con carácter previo al filtrado de los datos sí se estaría produciendo un acceso a los datos que, precisamente, será necesario para proceder a su depuración, anonimización o conversión en pseudónimos.

De este modo, sería necesario, al menos en ese primer estadio, que la actividad desplegada por la consultante encontrase cobertura en las causas de legitimación para el tratamiento establecidas por la normativa de protección de datos de carácter personal. Además, sería igualmente preciso tener en cuenta



que la transmisión de los datos a la contraparte debería igualmente encontrarse sometida a tal legitimación, por cuanto pudiera producirse la transmisión de algún dato adicional a los enumerados con anterioridad o referido a sujetos cuyos datos sí se encontrasen amparados por la legislación de protección de datos, siendo igualmente posible que en una segunda fase se solicitase la aportación de información adicional a la inicialmente remitida, como señala la propia consulta al poner de manifiesto que la realización de una copia de seguridad tiene por objeto atender a un posible cuestionamiento relativo a la integridad de la información remitida.

#### IV

Entrando en consecuencia en el análisis de la legitimación para el tratamiento y posterior cesión de la información, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 6.2.

En cuanto a las cesiones de datos, prevé el artículo 11.1 de la Ley Orgánica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no será preciso el consentimiento en caso de que la cesión se encuentra amparada por una norma con rango de Ley, tal y como prescribe el artículo 11.2 a).

En este punto, debe recordarse que esta Agencia ya ha tenido la ocasión de analizar la posible concurrencia en un determinado supuesto de tratamiento de datos de los derechos fundamentales a la protección de datos de carácter personal y a la tutela judicial efectiva del responsable del tratamiento. Así, se ha considerado por ejemplo que el tratamiento por un abogado de los datos de la parte contraria de su cliente encuentra su amparo en el reconocimiento a éste último por el artículo 24.1 de la Constitución de su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que implica, según el apartado 2, la defensa letrada y el uso de los medios de prueba pertinentes para la defensa de su derecho. En este sentido, el informe de 21 de febrero de 2001 se señalaba lo siguiente:

*“En este caso, como se dijo, el tratamiento por los abogados y procuradores de los datos referidos a la contraparte de sus clientes en los litigios en que aquéllos ejerzan la postulación procesal trae su causa,*



*directamente, del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia letrada, consagrado por el artículo 24.2 del Texto Constitucional.*

*En efecto, la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos por el abogado o procurador supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que su cliente pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la falta de estos datos puede implicar, lógicamente, una merma en la posibilidad de aportación por el interesado de “los medios de prueba pertinentes para su defensa”, vulnerándose otra de las garantías derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho.*

*Por todo ello, si bien ninguna disposición con rango de Ley establece expresamente la posibilidad del tratamiento por abogados y procuradores de los datos referidos al oponente de su cliente en el seno de un determinado proceso judicial, es evidente que dicha posibilidad trae causa directa de una norma de rango constitucional, reguladora además de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución, y desarrollado por las leyes reguladoras de cada uno de los Órdenes Jurisdiccionales, en los preceptos referidos a la representación y defensa de las partes.*

*Por todo ello, existe, desde nuestro punto de vista, una habilitación legal para el tratamiento de los datos, que trae su cobertura del propio artículo 24 de la Constitución y sus normas de desarrollo.”*

Ciertamente, el supuesto descrito en el citado informe no se corresponde íntegramente con el que es objeto de estudio en el presente supuesto, dado que por una parte, nos encontramos ante un supuesto en que es la contraparte la que solicita la información y, por otro, dicha información se encuentra referida a empleados, clientes o terceros relacionados con esa contraparte. No obstante, las conclusiones alcanzadas en el análisis descrito sí pueden resultar aplicables a este supuesto, dado que como señala la consultante si la información no es facilitada en los términos que sean requeridos por la autoridad judicial estadounidense se produciría por aquélla un incumplimiento de una orden judicial en ese país por la que la consultante por la que el consultante podría enfrentarse a la imposición de sanciones monetarias o a un fallo contra la misma y a favor de los demandantes.





Por tanto, sería en principio posible entender que el tratamiento que realice la consultante y la posterior cesión de los datos a la contraparte, pudieran entenderse amparadas y legitimadas por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 24 de la Constitución.

## V

La conclusión que acaba de alcanzarse debe ahora ser analizada en conexión con las sostenidas por el Grupo de Trabajo del artículo 29 en el documento de trabajo al que se viene haciendo constante referencia en este informe.

Según el citado documento la legitimación para el tratamiento podría traer causa de lo dispuesto en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, según el cual “Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si (...) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”.

Debe en este punto tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 ha señalado que el mencionado precepto se encuentra dotado de efecto directo, por lo que deberá ser tomado directamente en cuenta en la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal por los Estados Miembros, y en consecuencia por esta Agencia Española de Protección de Datos.

Tal y como recuerda la Sentencia en su apartado 38, el artículo 7 f) de la Directiva “establece dos requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado” y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda que la misma “dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado”.

Por este motivo, la sentencia señala en su apartado 46 que los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán “procurar basarse en una interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, por lo, conforme a su apartado 47 que “nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios que deben regir dicha ponderación”.

Por tanto, para determinar si procedería la aplicación del citado precepto habrá de aplicarse la regla de ponderación prevista en el mismo; es decir, será necesario valorar si en el supuesto concreto objeto de análisis existirá un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca sobre el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la LOPD, según el cual “la presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” o si, por el contrario, dichos derechos fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han de prevalecer sobre el interés legítimo en que el responsable pretende fundamentar el tratamiento de los datos de carácter personal.

En este mismo sentido, el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que será posible el tratamiento y la cesión de los datos sin contar con el consentimiento de los afectados cuando lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando “el tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

De este modo, atendiendo a lo señalado en el apartado anterior de este informe y a la necesaria ponderación exigida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, deberá plantearse si los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa de la consultante prevalecerán o no sobre el derecho a la protección de datos de los afectados cuyos datos sean objeto de tratamiento y, en su caso, de cesión a la contraparte en virtud del requerimiento efectuado por la autoridad judicial estadounidense en fase de pre-trial discovery.

## VI

El Grupo de Trabajo del artículo 29 viene a sentar en su documento cuáles deberían ser los criterios de ponderación a tomar en consideración para que pueda considerarse prevalente el derecho de quien sea requerido a facilitar la información sobre el derecho a la protección de datos de las personas cuyas informaciones sean objeto de tratamiento y cesión.

Así, el citado documento hace especial referencia, como criterios necesarios para llevar a cabo la citada ponderación, a los principios de proporcionalidad y transparencia, así como el hecho de que el tratamiento de los datos previo a la remisión de la información sea efectuado directamente por el requerido o a través de un tercero de confianza.

Este último requisito es el de más fácil solución y que aparece directamente resuelto a su vez en la consulta planteada, toda vez que las dos fases de tratamiento previo y filtrado llevadas a cabo en territorio español serán efectuadas, según indica expresamente la consulta, directamente por la consultante o a través de una tercera entidad con la que en todo caso se haya culminado la celebración de un contrato que reúna todos los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999. Así se indica que “todos los prestadores de servicios involucrados realizarán todo su trabajo hasta la fase de entrega dentro de la Unión Europea y, por ello, con contratos de tratamiento de datos adecuados al art. 12 de la LOPD”.

Respecto de los dos principios restantes, el de proporcionalidad aparece recogido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Esta proporcionalidad se derivará además en el presente supuesto de la necesaria ponderación de la lesión que pudiera producirse en los derechos de los afectados como consecuencia del tratamiento y, en su caso, remisión de la información.

El documento de trabajo de constante cita señala que el responsable habría de determinar si resulta necesario el tratamiento de todos los datos o si el resultado perseguido por la contraparte podría cumplirse igualmente previa



anonimización de los datos, de forma que cuando la identidad del sujeto no sea relevante debería efectuarse una actividad de filtrado, no siendo necesario que se facilite esa información en una primera instancia. Si fuera necesaria una posterior remisión, el Grupo del artículo 29 señala que debería producirse un nuevo proceso de filtrado que garantice el mantenimiento del requisito de equilibrio de derechos e intereses establecido en la Directiva para que el tratamiento sea legítimo. Además, este filtrado, como ya se ha dicho, debería llevarse a cabo por el responsable o por un tercero de confianza y siempre dentro del territorio de la Unión.

En el supuesto descrito en la consulta se prevé expresamente la realización de esa actividad de filtrado de la información que, sin perjuicio de un mantenimiento íntegro de la información en una copia de seguridad que no sería objeto de comunicación, permitirá, en primer lugar, que los propios empleados filtren toda información que no guarde relación con su actividad profesional y quede circunscrita a su actividad privada; en segundo lugar, que se proceda a un segundo filtrado de la información, reduciendo la misma a la que resulte de la aplicación de unas palabras clave acordadas con la propia contraparte; y, en tercer lugar, que un tercero de confianza, que cumpla todas las exigencias previstas en la Ley para el encargado del tratamiento, proceda a la anonimización de los datos que no resulten expresamente necesarios para su remisión, tratando al menos en esta primera fase de remisión de evitar que se faciliten datos distintos de los establecidos en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Por lo que respecta al principio de transparencia, es decir, al cumplimiento del deber de información consagrado en España por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, la consulta señala que los empleados serán informados acerca del procedimiento de recopilación, procesamiento y entrega a efectuar a los demandantes en el seno del procedimiento judicial en los Estados Unidos, por lo que quedaría garantizada igualmente la aplicación de este principio.

Por tanto, teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, aplicada la regla de ponderación exigida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al presente supuesto, cabe concluir nuevamente que el tratamiento y cesión de los datos, siempre que se cumplan todas las garantías establecidas en la consulta, se encuentran amparados por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 24 de la Constitución.

## VII

Por último, en lo que respecta a la transferencia internacional de datos que tendría lugar a la contraparte, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el presente informe en el sentido de que es posible que en fases posteriores o incluso en esta primera fase se produzca la transmisión de datos a las autoridades judiciales estadounidenses y, en consecuencia, fuera del Espacio Económico Europeo, por lo que será preciso comprobar si dicha transferencia resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.

En este sentido, debe en primer lugar indicarse que el artículo 65 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “La transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento”, debiendo indicarse que este requisito aparecería cumplido, dado que se ha concluido que el tratamiento y cesión de los datos resulta legitimado por la mencionada Ley Orgánica.

En cuanto a la licitud de la transferencia, el documento de trabajo del Grupo del artículo 29 señala que la transferencia podría considerarse amparada por el artículo 26.1 d) de la Directiva, según el cual “no obstante lo dispuesto en el artículo 25 y salvo disposición contraria del Derecho nacional que regule los casos particulares, los Estados miembros dispondrán que pueda efectuarse una transferencia de datos personales a un país tercero que no garantice un nivel de protección adecuado con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 25, siempre y cuando (...) la transferencia sea necesaria o legalmente exigida (...) para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial”.

Este supuesto aparece igualmente contenido en el apartado i) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, que entiende que no será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos “Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial”.

En consecuencia, la transferencia internacional de los datos derivada de la actuación descrita en la consulta, y siempre sujeta a los límites que en la misma se describen, será conforme igualmente a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.



## VIII

A la vista de todo lo anterior, procede informar que los tratamientos descritos en la consulta y la ulterior transferencia internacional de los datos sí se encuentran sujetas a la Ley Orgánica 15/1999, siendo conformes a la misma siempre y cuando se cumplan las cautelas que la propia consulta prevé.